

Fecha 27.12.2008	Sección Primera	Página 14
---------------------	--------------------	--------------

ERUBIEL TIRADO

# Recuento de dos años... ¿o de los daños?

**T**al parece que el pensamiento del conservadurismo gubernamental se transmuta. A la novedad de las condiciones que vive y padece nuestro país, y a la máxima de que “todo tiempo pasado fue mejor”, debe añadirse su cambio por el presidente Calderón en la fórmula opuesta. Así es al menos en lo que toca a la visión de las soluciones que ensaya para enfrentar la crisis de seguridad con la que se estrenó hace dos años: “¡Todo tiempo pasado... fue peor!” El presidente afirmó ante un auditorio castrense (**Excélsior**, 20 de diciembre) que “haber ignorado o haber pretendido *administrar a la delincuencia*, en lugar de enfrentarla con determinación en el pasado, trajo consecuencias funestas para México...” y, en otra parte de su alocución, señaló que su “gobierno no negocia ni negociará jamás con las organizaciones criminales...”

La referencia presidencial, tanto por su origen como por su contenido, debe ser materia no sólo de análisis por parte de los actores políticos y los otros poderes estatales, sino también de un debate intenso por y ante la opinión pública. En el primer segmento de su aserto, el Presidente está implicando una política deliberada y facciosa de aplicación de la ley en cuanto a lo que se refiere a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el pasado. Si bien antes la idea se planteaba como hipótesis para explicar ciertos patrones de impunidad y de comportamiento gubernamental, no es un asunto menor que el jefe del Ejecutivo, más aún en el contexto en que lo dijo, “como Presidente de la República y comandante supremo de la Fuerzas Armadas”, establezca que en verdad así ocurrió. De ser así, hay un imperativo categórico de moral pública para señalar en forma indubitable, con datos fehacientes, que los gobiernos anteriores al suyo negociaron con las bandas criminales.

El complemento de la declaración presidencial también debe analizarse. Según podría esperarse que una administración gubernamental, independiente de su signo político, recurra a usos y costumbres heredadas de un pasado autoritario y clientelar y negocie la aplicación de la ley. No es mérito que el gobierno calderonista haga esa diferencia, toda vez que, como instrumento del Estado, se encuentra obligado a desplegar todo su interés, acciones y recursos disponibles para la preservación del Estado mismo ante amenazas que ponen en riesgo su viabilidad. Lo que llama la atención

Continúa en siguiente hoja



Fecha <b>27.12.2008</b>	Sección <b>Primera</b>	Página <b>14</b>
----------------------------	---------------------------	---------------------

es la pretensión de valorar una obligación estatal, cual si se tratase de una concesión gubernamental, y no es así. La afirmación presidencial en su conjunto debiera provocar un mínimo de extrañamiento en el ámbito legislativo y en el Poder Judicial. Sin embargo, sus propias ocupaciones propician silencio que fortalece la figura presidencial y debilita al Estado mexicano. Ahí están, cual muestrario oportuno, la llamada “miscelánea penal y de justicia” con sus retrocesos legales que han flexibilizado aún más los catálogos de garantías procesales y anulan los tímidos avances en materia de transparencia y rendición de cuentas en lo que se refiere al tratamiento ministerial de las sesudas investigaciones que emprenden nuestras autoridades.

Como deslinde involuntario aparecen las voces del pasado inmediato que dieron pauta a la intervención presidencial cuando por un lado se induce a pensar que la violencia que ataca al país puede aliviarse con una “negociación” al margen de las instituciones y que la estrategia calderonista tiene futuro precisamente debido a lo que hizo su antecesor en materia antinarco (16 de diciembre).

Pero si algo puede destacarse entre los regímenes presente y pasado, es la continuidad no sólo de estrategias militaristas en el campo de la seguridad pública, lo mismo que de los funcionarios encargados de ponerlas en práctica, sino de la falta de resultados que sienten las bases para la contención y control del fenómeno que se ha agudizado en los últimos ocho años. En el bienio que está por fenecer se está rompiendo el récord de ejecuciones, más de ocho mil, según la CNDH, donde en un año y otro prácticamente se duplican (más de cinco mil 560 muertes al terminar la semana navideña). De acuerdo con el Análisis Anual de Conflicto, que desde hace más de tres lustros realiza la Universidad de Heidelberg, nuestro país observa el “conflicto más sangriento en las Américas”, donde hemos pasado, según su escala de medición, de tener una situación de “crisis” en 2007 a un estado de violencia con “crisis severa” y a punto de la categoría de “guerra” (*Conflict Barometer 2008*, Heidelberg Institute for International Conflict Research, pp. 45-49).

Es cierto que buena parte de lo que ahora vivimos fue incubado a lo largo de años de ineficiencia, corrupción y aun de frivolidad política, pero también lo es que muchos de nuestros gobernantes actuales fueron partícipes de la herencia que ahora niegan reconocer como suya. La pregunta es si estamos siendo críticos para mirar al futuro o para justificar de nuevo las carencias por venir.

Es cierto que buena parte de lo que ahora vivimos fue incubado a lo largo de años de ineficiencia, corrupción, etcétera, pero también que muchos de nuestros gobernantes actuales fueron partícipes de la herencia que ahora niegan como suya.